

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público



Juzgado Diecinueve Civil Municipal

Bogotá D.C, veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022).

Ref. No. 2016-01488.

Se resuelve sobre la solicitud de levantamiento de la medida cautelar como en derecho corresponde, previo los siguientes:

I. ANTECEDENTES:

1. El 9 de septiembre de 2016 se admitió la solicitud de trámite de negociación de deudas de persona natural no comerciante presentada por el señor José Vicente Márquez Bedoya en la Notaria Segunda (2) del Círculo de Bogotá.
2. Mediante auto 11 de octubre de 2017 se ordenó la apertura de la liquidación patrimonial dentro del trámite de insolvencia de persona natural no comerciante promovida por José Vicente Márquez Bedoya.
3. Posteriormente, el 13 de julio de 2021 el deudor José Vicente Márquez Bedoya solicitó el levantamiento de la medida de embargo que recae sobre el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 50C-637888 aduciendo que el mismo es utilizado por la institución Confesión Gnóstica Internacional Antropológica Crística – COFGNIAC por más de 12 años de manera constante e ininterrumpida, por lo que se trataría de un bien que ostentan la calidad de inembargable.
4. Por auto de 31 de mayo de 2022 se requirió a la auxiliar de la justicia designado en el presente asunto para que emitiera un concepto detallado acerca de la procedencia frente al levantamiento de la medida cautelar que recae sobre el inmueble mencionado.
5. El liquidador indicó que el deudor presentó bajo la gravedad de juramento inventario en el cual se incluyó el bien inmueble con matrícula inmobiliaria No. 50C-637888 y como quiera que es el señor José Vicente quien aparece como propietario en el certificado de tradición del bien, no es dado aplicar lo previsto en el artículo 594 del C.G.P.

Por otra parte, precisó que es de vital relevancia se mantenga la medida cautelar de embargo sobre el referido bien inmueble, por cuanto el mismo garantiza los derechos de los aquí acreedores.

II. CONSIDERACIONES

1. Dentro del amplio abanico de posibilidades con que el deudor cuenta para honrar sus obligaciones frente a sus acreedores producto de una crisis por el sobreendeudamiento u otros factores, el Legislador creó un nuevo régimen de insolvencia para personas naturales no comerciantes, que tiene como punto de partida el procedimiento de negociación de deudas, luego, la convalidación del acuerdo privado y la liquidación patrimonial.

Ubicados en el primer escenario, cumple anotar desde el umbral que se trata de una serie de procedimientos en virtud de los cuales intervienen el deudor y sus acreedores, en cuya primera fase está encaminada a buscar alternativas efectivas de solución de las obligaciones vencidas a través de distintas fórmulas de arreglo que permitan llegar a lo normalidad crediticia.

Bajo esta perspectiva, la proposición debe ser clara, expresa y objetiva, es decir, acorde con su estado patrimonial y el de los convocados; en otros términos, equilibrada, razonable, proporcional, posible de cumplir en procura de buscar la satisfacción e igualdad de los acreedores sin desconocer los lindes de privilegio que detentan algunas acreencias, posibilitando la concreción de un acuerdo de pago que constituye una segunda fase y en virtud del cual ante la imposibilidad en cabeza del deudor de atender sus obligaciones en las condiciones inicialmente pactadas es menester que sus acreedores de común acuerdo realicen concesiones en los términos y la forma en que se dará el cumplimiento de las mismas modificando ciertos aspectos como el plazo y los montos por concepto de capital e intereses a fin de que el insolvente pueda estabilizar su situación financiera.

En el evento en que no sea posible establecer un acuerdo de pago en los términos antes descritos o que, luego de haberse celebrado, sea declarado nulo ora se presente incumplimiento por parte del deudor, el legislador, en los artículos 563 y subsiguientes del Código General del Proceso, previó igualmente un procedimiento de liquidación patrimonial ante el juez civil municipal, que tiene por objeto la satisfacción universal y ordenada de los créditos del deudor en un mismo escenario de acuerdo con las reglas legales sobre prelación evitando la continuación de múltiples procesos ejecutivos para el cumplimiento forzoso de las obligaciones, tratándose de un trámite eminentemente recuperatorio que concluye con la adjudicación de los bienes del deudor adquiridos hasta antes de la apertura del proceso concursal.

Al respecto en la exposición de motivos de las citadas disposiciones señaló:

“El Capítulo IV del Título prevé el procedimiento de liquidación patrimonial, como un procedimiento liquidatorio complementario del trámite recuperatorio de negociación de deudas. (...)”

De esta manera, las modificaciones prevén el establecimiento de un trámite liquidatorio concursal para la persona natural no comerciante, en el que se disponga el pago ordenado y de acuerdo con la prelación de créditos, dentro de un contexto que afecte la totalidad de los bienes del deudor, salvo los inembargables, que comprenda a todos sus acreedores, y les dé a estos un trato igualitario (par condicio creditorum).

*(...) A diferencia de lo que ocurre en los procesos ejecutivos, el efecto principal de la adjudicación consiste en la mutación de los saldos insolutos a obligaciones naturales, que siguiendo los avances del derecho comparado sobre el tema, **brinda al deudor la posibilidad de un nuevo inicio en su situación patrimonial (artículo 571), dejando libre la posibilidad al deudor de que complete el pago con posterioridad para lograr la eliminación de la información negativa que sobre él existiere en las bases de datos, y lograr así su rehabilitación.***¹ (Énfasis fuera de texto).

2. Ahora bien, el artículo 565 del Código General del Proceso, establece los efectos de la iniciación de la liquidación patrimonial, dentro de los cuales se encuentran, entre otros, la remisión *“de todos los procesos ejecutivos que estén siguiéndose contra el deudor, incluso los que se lleven por concepto de alimentos”* y *“Las medidas cautelares que se hubieren decretado en estos sobre los bienes del deudor serán puestas a disposición del juez que conoce de la liquidación patrimonial”*.

De ahí, que las cautelares que se hayan hecho efectivas en los litigios que se remiten al proceso de insolvencia quedan a cuenta del mismo, sin embargo, el legislador no estableció en forma específica que el juez del concurso contará con la facultad de disponer su levantamiento, o los casos en los que era procedente, ni la forma concreta de hacerlo (si a ello hubiere lugar), por lo que, entonces, es necesario acudir a las reglas generales dispuestas para las medidas cautelares del estatuto procesal y las normas que regulan los procesos de insolvencia, para poder resolver por analogía de conformidad con el artículo 12 del estatuto adjetivo las controversias que se susciten al respecto.

2.1. Atendiendo lo anterior, al tenor literal de lo dispuesto en el artículo 591 *ejusdem*, es procedente el levantamiento del embargo y secuestro en los siguientes casos:

1. Si se pide por quien solicitó la medida, cuando no haya litisconsortes o terceristas; si los hubiere, por aquel y estos, y si se tratare de proceso de sucesión por todos los herederos reconocidos y el cónyuge o compañero permanente.

2. Si se desiste de la demanda que originó el proceso, en los mismos casos del numeral anterior.

¹ Gaceta del Congreso, Informe de ponencia para primer debate proyecto de ley 159 de 2011 Senado, 196 de 2011 Cámara (28 de marzo de 2012).

3. Si el demandado presta caución para garantizar lo que se pretende, y el pago de las costas.
4. Si se ordena la terminación del proceso ejecutivo por la revocatoria del mandamiento de pago o por cualquier otra causa.
5. Si se absuelve al demandado en proceso declarativo, o este termina por cualquier otra causa.
6. Si el demandante en proceso declarativo no formula la solicitud de que trata el inciso primero del artículo 306 dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia que contenga la condena.
7. Si se trata de embargo sujeto a registro, cuando del certificado del registrador aparezca que la parte contra quien se profirió la medida no es la titular del dominio del respectivo bien, sin perjuicio de lo establecido para la efectividad de la garantía hipotecaria o prendaria.
8. Si un tercero poseedor que no estuvo presente en la diligencia de secuestro solicita al juez del conocimiento, dentro de los veinte (20) días siguientes a la práctica de la diligencia, si lo hizo el juez de conocimiento o a la notificación del auto que ordena agregar el despacho comisorio, que se declare que tenía la posesión material del bien al tiempo en que aquella se practicó, y obtiene decisión favorable. La solicitud se tramitará como incidente, en el cual el solicitante deberá probar su posesión.

También podrá promover el incidente el tercero poseedor que haya estado presente en la diligencia sin la representación de apoderado judicial, pero el término para hacerlo será de cinco (5) días.

Si el incidente se decide desfavorablemente a quien lo promueve, se impondrá a este una multa de cinco (5) a veinte (20) salarios mínimos mensuales.

9. Cuando exista otro embargo o secuestro anterior.

10. Cuando pasados cinco (5) años a partir de la inscripción de la medida, no se halle el expediente en que ella se decretó. Con este propósito, el respectivo juez fijará aviso en la secretaría del juzgado por el término de veinte (20) días, para que los interesados puedan ejercer sus derechos. Vencido este plazo, el juez resolverá lo pertinente.

En los casos de los numerales 1, 2, 9 y 10 para resolver la respectiva solicitud no será necesario que se haya notificado el auto admisorio de la demanda o el mandamiento ejecutivo.

Siempre que se levante el embargo o secuestro en los casos de los numerales 1, 2, 4, 5 y 8 del presente artículo, se condenará de oficio o a solicitud de parte en costas y perjuicios a quienes pidieron tal medida, salvo que las partes convengan otra cosa.

En todo momento cualquier interesado podrá pedir que se repita el oficio de cancelación de medidas cautelares.

11. Cuando el embargo recaiga contra uno de los recursos públicos señalados en el artículo 594, y este produzca insostenibilidad fiscal o presupuestal del ente demandado, el Procurador General

de la Nación, el Ministro del respectivo ramo, el Alcalde, el Gobernador o el Director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, podrán solicitar su levantamiento.

En concordancia, con el anterior debe señalarse que el artículo 20 de la Ley 1116 de 2020 prevé que *“a partir de la fecha de inicio del proceso de reorganización no podrá admitirse ni continuarse demanda de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra del deudor. Así, los procesos de ejecución o cobro que hayan comenzado antes del inicio del proceso de reorganización, deberán remitirse para ser incorporados al trámite y considerar el crédito y las excepciones de mérito pendientes de decisión, las cuales serán tramitadas como objeciones, para efectos de calificación y graduación y las medidas cautelares quedarán a disposición del juez del concurso, según sea el caso, quien determinará si la medida sigue vigente o si debe levantarse, según convenga a los objetivos del proceso, atendiendo la recomendación del promotor y teniendo en cuenta su urgencia, conveniencia y necesidad operacional, debidamente motivada”*.

Puestas de esta manera las cosas, es claro que el levantamiento de medidas cautelares en los trámites de liquidación de persona natural no comerciante, debe obedecer a alguna de las causales dispuestas por el legislador o ser conveniente para los objetivos del proceso de insolvencia, previa recomendación del liquidador en este caso y debe atender su urgencia, conveniencia y necesidad operacional, debidamente motivada.

2. Por otra parte, el numeral 10° del artículo 594 del Código General del Proceso, que no se podrá embargar: *“Los bienes destinados al culto religioso de cualquier confesión o iglesia que haya suscrito concordato o tratado de derecho internacional o convenio de derecho público interno con el Estado colombiano”*.

De manera que, el estatuto procesal estable como regla para que los bienes destinados a culto religioso tengan la calidad de inembargabilidad que la confesión o iglesia haya suscrito concordato o tratado de derecho internacional o convenio de derecho público interno con el estado colombiano. Circunstancias que, de no cumplirse los bienes no se encontrarían dentro de los previstos como inembargables.

Y es que si bien, la Corte Constitucional en sentencia C-346 de 2019, declaró la exequibilidad condicionada de dicha norma, lo hizo bajo el entendido: *“de que todas las confesiones e iglesias, que tengan personería jurídica y que cumplan con los requisitos legales, pueden acceder a la celebración de alguno de estos instrumentos en condiciones de igualdad”*, lo cierto es que no eliminó el requisito o no lo declaró inexecutable, sino que impuso que los mismos se podían cumplir por cualquier confesión o iglesia, razón por la que debe cumplirse.

En otras palabras, la citada Corporación dejó en firme la prohibición con sus requisitos, pero exigió fue al Ministerio del interior (autoridad encargada) que, en aplicación de la igualdad entre las iglesias, procediera a firmar los convenios con el resto de los cultos y

lo que justamente fue reglamentado por la Cartera Ministerial mediante el Decreto 1749 de 2020, que estableció los parámetros al respecto, por lo que no cabe duda que los cultos y religiones deben tener los tratados para que pueda tener aplicación la excepción de inembargabilidad.

3. En el caso en concreto, el deudor solicita el levantamiento de la medida de embargo que recae sobre el bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 50C-637888, la cual se decretó en el curso del proceso 2008-00349 que conoció el Juzgado Quinto (5) Civil del Circuito de Ejecución de sentencias de esta ciudad, cautela que fue puesta a disposición del presente proceso de liquidación, mencionando que el mismo se trata de un bien que ostenta la calidad de inembargable.

Sin embargo, no puede atenderse positivamente la mencionada solicitud, en tanto que, en primer lugar, el bien cautelado no es propiedad de la institución religiosa a la que se hace referencia y el motivo por el que se peticiona se cancele la medida no se enmarca en una de las causales dispuestas en el artículo 591 del CGP antes referido, atendiendo a que no se presentó por quien solicitó la misma o algún poseedor, ni se ha terminado el proceso o absuelto al deudor, así como no se trata de un bien público.

Sumado a lo anterior, tampoco se reúnen los requisitos especiales del artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, pues no se advierte que su levantamiento convenga a los objetivos del proceso de insolvencia de persona natural no comerciante, además que la recomendación o concepto del liquidador designado en el trámite, fue negativa, al indicar que: *“es necesario que este bien continúe blindado con la medida cautelar de embargo y con esto salvaguardar los derechos de los acreedores por lo que el suscrito liquidador recomienda denegar la solicitud incoada por el deudor ya que, de levantarse esta medida, se estaría poniendo en riesgo la capacidad de pago del deudor, con lo que se verían afectados los intereses de los acreedores”*.

Puestas de esta manera las cosas, no se cumplen los presupuestos legales que regulan el asunto para atender la rogativa de levantamiento de cautela.

4. Al margen de lo anterior, tampoco es posible atender la petición teniendo en cuenta el motivo expuesto por el deudor, esto es, que el bien es inembargable, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 10° del artículo 594 del CGP, pues como ya se expuso para que los bienes tengan dicha calidad, es necesario que el culto o iglesia hayan suscrito convenio de derecho público con el Estado, lo que no aparece probado en el expediente.

En efecto, pese a que en providencia de 16 de septiembre de 2021, se requirió al deudor para que acreditara que la institución religiosa denominada CONFESIÓN GNÓSTICA INTERNACIONAL ANTROPOLÓGICA CRÍSTICA-COFGNIAC, suscribió concordato o tratado de derecho internacional o convenio de derecho público interno con el Estado Colombiano, de conformidad con la norma en cita, lo cierto es que éste no allegó prueba

alguna al respecto, por el contrario, insistió en que de acuerdo a la sentencia C-346 de 2019, no era necesario, cuando lo cierto es que como se ha explicado lo resuelto en tal presente no fue quitar el requisito, sino dejar que las Iglesias suscribieran los convenios.

Por consiguiente, no se advierte que el bien acá embargado propiedad del deudor y no de la institución religiosa antes referida, tenga calidad de inembargable y por ende se deba proceder a la cancelación de la cautela.

5. De conformidad con lo anteriormente expuesto, este Despacho encuentra improcedente la solicitud de levantamiento de la orden de embargo que recae sobre el bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 50C-637888, razón por la cual no se negará la misma.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el **Juzgado Diecinueve (19) Civil Municipal de Bogotá D.C.**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, **RESUELVE:**

ÚNICO: NEGAR el levantamiento de la medida de embargo que recae sobre el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 50C-637888.

Notifiquese,²

**IRIS MILDRED GUTIÉRREZ
JUEZ**

Firmado Por:
Iris Mildred Gutierrez
Juez Municipal
Juzgado Municipal
Civil 019
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

² Esta providencia se notificó por estado No. 80 de 29 de julio de 2022.

Código de verificación: **054594df0f5c8f49e1cd2261c181dad538b19e346af1c84f23292cb91452cf4f**

Documento generado en 28/07/2022 12:52:13 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>